

## **Extractivismo: abusos e injusticias en las “zonas de sacrificio”**

*Alejandra Donoso Cáceres*

*Vivir oliendo el peligro de respirar, bebiendo el veneno que se acumula en cuerpos que se tornan verdes. Protagonizar la enfermedad, el deterioro, la contaminación, la injusticia. Asistir a la condena que dibuja la historia de los poderosos, sostenida en el desprecio de la vida digna, sabiendo que todo emana del abuso y del despojo, que el Estado no responde, que no hay escapatoria, que solo queda cuestionar, resistir, exigir y defender. Al digno habitar en las “zonas de sacrificio” y su lucha por justicia.*

21  
Extractivismo: abusos e injusticias en las “zonas de sacrificio”

**Hay un relato posible que reúne la macroeconomía** y la mega industria, la concentración del poder y la injusticia ambiental, evidente a los ojos del activismo que busca el resguardo de los derechos humanos y de la naturaleza. Este relato, violentamente estructural, obedece a patrones macro de crecimiento económico, es consecuencia natural de la ambición de unos pocos que concentran el poder y toman las decisiones, y para quienes, tal como los límites planetarios, pareciera ser una realidad irrelevante. Las “zonas de sacrificio”, concepto acuñado por sus propios habitantes como una forma de visibilización<sup>1</sup> de la injusticia que viven, “son aquellos territorios de asentamiento humano devastados ambientalmente por causa del desarrollo industrial. Esta devastación tiene implicaciones directas en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas; derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la

---

1 No es un concepto establecido en el ordenamiento jurídico, ni sería correcto plantear que todo territorio contaminado lo sea, pues se trata de una noción acuñada por sus protagonistas. En Chile, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, en su Informe Anual del año 2014, reconoció la existencia de esta realidad, que ha sido traída a la superficie por sus propios habitantes, en un acto que busca, hasta el día de hoy, que los distintos gobiernos tomen medidas que les devuelvan la dignidad que les han querido robar, así como alertar sobre la negligencia del Estado en permitir que exista. <http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/740>

vivienda, etc. En estos territorios el daño ambiental ha significado la situación de vulnerabilidad y empobrecimiento de las comunidades<sup>2</sup>.

Crecimiento económico desmedido, un Estado ausente y la vulneración de los derechos humanos de forma indivisible e interdependiente, son las características de estos territorios. En las “zonas de sacrificio” es frecuente, por ejemplo, sentir olor a almendras, propio de la presencia de cianuro en el ambiente; o a gas, lo que indica alguna fuga de hidrocarburos en alguna, en varias o en todas las industrias contaminantes que las invaden; sentir la garganta apretada, picazón en la piel, dolor de cabeza, náuseas, mareos; padecer enfermedades crónicas, respiratorias, cardiovasculares y nerviosas; o que los órganos de sus habitantes se vuelvan verdes por la contaminación.<sup>3</sup> Me interesa mostrar y explicar el nexo entre la política extractivista de la dinámica Norte-Sur y una de sus consecuencias más invisibilizadas y urgentes de atender: las “zonas de sacrificio”. El vínculo causal entre el crecimiento económico desregulado e ilimitado y las vulneraciones de derechos que ocurren en estos lugares es observable empíricamente, y también analizable como un fenómeno de estudio, en el que la ausencia del Estado juega un rol determinante y asombroso, configurando y profundizando los costos de un “desarrollo” malentendido, que se traducen en marginación y pobreza, sin llamar la atención en los procesos de toma de decisión.

Una de las evidencias más elocuentes de la política extractivista en la región son las denominadas “zonas de sacrificio”. Una de ellas, la de Concón, Quintero y Puchuncaví en la región chilena de Valparaíso, es ejemplo de lucha de sus habitantes, quienes durante años y de manera organizada se han enfrentado al abuso de la industria y a la pasividad del Estado. Este es uno de los casos en que nos hemos involucrado activamente desde la ONG Defensoría Ambiental, articulando con sus habitantes mecanismos institucionales y organizativos que respondan a la magnitud del daño que han sufrido, mediante un trabajo complejo

---

2 Ver documento firmado por los alcaldes de Huasco, Tocopilla, Puchuncaví, Quintero y Coronel. <http://www.ojoconelparlamento.cl/sites/default/files/minuta/S%208a%20Peticones%20conclave%20alcaldes%20zonas%20de%20sacrificio.pdf>, mayo de 2014; Acta Cónclave zonas de sacrificio en resistencia, Ventanas, 11, 12 y 13 de noviembre de 2016. <http://accionag.cl/wp-content/uploads/2016/12/Declaraci%C3%B3n-C%C3%B3nclave-Zonas-de-Sacrificio-en-Resistencia-2016.pdf>

3 Conocido es el caso de los “hombres verdes”, cuyas viudas lograron la exhumación de sus cuerpos y pudieron constatar, por el color de sus órganos, lo que sospechaban: sus muertes se produjeron por respirar el veneno que emana la mezcla de gases de la fundición del cobre.

y exigente de defensa que va mucho más allá de las recurrentes promesas cosméticas de mitigación.

En un área de 28 800 hectáreas se emplazan 14 industrias de diversa índole, algunas de ellas pertenecientes al Estado. Inaugurado en 1964, el complejo industrial Ventanas era conformado por tres empresas: la fundición y refinación de cobre de la Empresa Nacional de Minería (Enami), hoy administrada por la estatal Corporación del Cobre (Codelco), la central termoeléctrica a carboncillo y petróleo Ventanas I, con 115 000 kw de potencia instalada, y Chilectra, hoy de la transnacional AES Gener, cuya entrada en funcionamiento data del año 1958. En el año 1992, las empresas que conformaban el CIV presentaron un Plan de Descontaminación elaborado por y para ellas, que luego fue visado por la autoridad estatal. En 1993 se declaró la zona saturada por dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>) y material particulado (MP).

Hoy, incluso tras una sentencia histórica de la Corte Suprema, la situación solo ha empeorado. Con el correr de los años, y a medida que el complejo industrial fue creciendo y sus emisiones fueron interactuando por la acumulación y sinergia, comenzaron a evidenciarse los impactos en la salud de las personas, lo que afectó sus derechos a la vida, integridad física y psíquica, salud y medio ambiente sano, de manera evidente y profunda. Son variadas las investigaciones que, desde distintas disciplinas, se han realizado a propósito de la situación que viven las personas que allí habitan. Dichas publicaciones dan cuenta también del cambio que ha sufrido la bahía y las consecuencias que ha traído el crecimiento del complejo industrial (Malman, 1995; Folchi, 2006; Muñoz y Pool, 2011; Muñoz, 2012; Neaman *et al.*, 2019; Madrid *et al.*, 2022). Bastaron cuatro años desde su inauguración para que el suelo se erosionara completamente, acumulando metales pesados en su superficie y permeando las napas subterráneas. Luego, los episodios agudos de contaminación han sido cada vez más frecuentes, destacando la crisis de envenenamientos masivos en la población escolar el año 2011 y la reciente crisis sanitaria que afectó, durante el segundo semestre de 2018, al menos a 1700 personas por gases tóxicos aún desconocidos.

La hostilidad que se torna normal requiere una respuesta animada, impetuosa, soñadora y persistente, que desemboca, necesariamente, en un activismo amoroso y comprometido, que resiste frente a la terrible naturalización del aire envenenado, del mar arrojando carbón a la playa, de la suspensión de clases por intoxicaciones que no son adecuadamente atendidas, de los frutos del mar y de la tierra contaminados, de personas que enferman y mueren solo por beber agua o por respirar.

En contraste, las decisiones de Estado se reducen a declaraciones vacías e insuficientes que, amparadas en un diseño constitucional

que configura el abuso, consolidan la injusticia, aun cuando ha sido transversalmente criticada. Es sorprendente que quienes toman las decisiones y conocen la realidad, porque les ha sido informada, tienen mecanismos para resguardar los derechos de las personas y, sin embargo, su actuar pareciera ser contrario a la protección de los derechos humanos.

De esa falta de empatía y humanidad venimos, esa es la realidad que la sociedad chilena, harta de maltratos, comienza a ver y a hacer evidente. Las protestas de 2018 por “no más zonas de sacrificio” fue la antesala a la revuelta de octubre de 2019. Demasiados ámbitos de la vida están (siguen estando) mediados por la injusticia e insuficiencia institucional. El estallido social, así como el proceso constituyente en ciernes, son síntomas de un descontento que no ha sido resuelto y que, por lo tanto, no desaparece.

### Las “zonas de sacrificio” son resultado de una política extractivista

La política extractivista es algo palpable en el sur global. Para que los grandes mercados del norte global puedan acceder a bienes y servicios se requiere de las materias primas que se extraen desde Asia, África y América Latina. Gudynas identifica tres características esenciales de esta forma de apropiación de bienes comunes (recursos naturales, dice), a saber: grandes volúmenes o alta intensidad en la extracción, una finalidad principalmente exportadora y alimentadora de mercados globales, en forma de *commodities* (materias primas) (Gudynas, 2018).

Es decir, la política extractivista, o el modelo extractivista, solo puede darse en el marco del modelo neoliberal, como fase tardía y profundizada del capitalismo, que pone en una balanza la justicia y la libertad, inclinándose la toma de decisiones hacia esta última, amparada en el dogma tergiversado de la mano invisible, en la creencia de que el mercado, libre de ataduras de cualquier índole, podría satisfacer una supuesta infinidad de necesidades humanas, pasando por alto la injusticia que esa idea esconde. Desde aquí se desprenden dos ideas necesarias de abordar. En primer lugar, el ejercicio del poder de manera abusiva (Cargallo, 2013), legitimado ideológicamente a lo largo de la historia. Como en la Biblia: “Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra”. O sea, el libro más significativo en el proceso de colonización, la voz más autorizada de todas, Dios, entregó el dominio absoluto de la naturaleza al hombre (no a la mujer), en una época en que las ideas de “absoluto” y

de “naturaleza” aún no entraban en conflicto. Esto permitió que aquellos que gozaron del privilegio de ese poder, así justificado, lo ejercieran sin límites y de manera abusiva (Rivera, 2013). Hoy vemos cómo esa depredación ilimitada tiene al planeta al borde de su capacidad de resiliencia (IPCC, 2021). En segundo lugar, el sinsentido brutal y doloroso de esta forma de administración de los recursos: el capitalismo neoliberal, y especialmente el extractivismo, que descansan sobre la pobreza de los territorios que expolían. Dondequiera que se extrae riqueza económica, se deja una huella de miseria y dolor, una suerte de colonización moderna (IPCC, 2021), que arrasa con la vida en los territorios, que se explica (yo solo he podido encontrar esta injustificada explicación) por la ceguera con que se miran los bienes naturales, bajo el paradigma del abuso de la apropiación de la naturaleza (y de cualquier cosa que sea convertible en mercancía). Para Lemebel, también era inexplicable: “¿Cómo puede haber gente dueña de tanto horizonte? ¿Cómo puede haber gente tan enguatada de paisaje? Me parece obscena esa glotonería de tanto tener” (2009).

Es en estos territorios donde el Estado decide sacrificar a la población (Folchi, 2006) y ocurren las vulneraciones de derechos humanos. La injusticia ambiental, en sus dimensiones distributiva, participativa y ecológica (Hervé, 2010; Martínez, 2016), impera en esos lugares, y es lo único que impera, una suerte de “lejano oeste” del Estado de derecho, donde el Estado es sabidamente ausente (ver infra). Así es como lo ven las propias comunidades que habitan estos territorios, reunidas en cónclaves que agrupan experiencias similares en territorios diversos, se reconocen “en sacrificio”.

Un Estado que permita que esto ocurra deja de realizar precisamente aquello para lo que existe, pues la razón de ser de un Estado de derecho, democrático, es la protección y garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas. Es grave que, siendo el rol del Estado promover el bien común y preservar la naturaleza, se comporte como un Estado ideológico, capaz de avasallar con aquello que debe proteger y se convierta en un ente fallido, justificando una promesa imposible de crecimiento económico, aun cuando la Corte Suprema, jerarquía máxima del poder judicial, lo ha reconocido, explicado y ordenado revertir, infructuosamente.

## Las “zonas de sacrificio” vulneran la salud y la vida de los ecosistemas y las personas

El malestar físico es habitual en las “zonas de sacrificio”, incluso para quien va de visita, el retorno con la cabeza abombada y adolorida,

náuseas, mareos y, en algunos casos, vómitos o ronchas, es frecuente. Habitar estas zonas es naturalizar el desmedro de la vida y de la salud, es constatar el desprecio por la naturaleza. En la “zona de sacrificio” de Concón, Quintero y Puchuncaví, de los cinco puertos de hidrocarburos, es normal que alguno genere un derrame cada cierto tiempo. También es normal que las estaciones de monitoreo atmosférico muestren excedentes de contaminantes que son nocivos para la salud. Incluso está naturalizada la insuficiencia y la falta de normas.

Enfermedades que afectan el sistema respiratorio, cardiovascular y nervioso, ya sea como patologías agudas o crónicas, están relacionadas directamente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con los gases que emiten las industrias contaminantes. No es de extrañar que en el relato de sus habitantes también sean frecuentes este tipo de enfermedades. Lo más terrible es que tampoco es de extrañar que no existan cifras oficiales acerca de estas enfermedades (Cortés, 2019), a pesar de la evidencia, que incluso ha llegado al nivel de la mutación genética por la exposición prolongada a metales pesados (Madrid, 2022). En estas zonas, al mismo tiempo que el polo industrial crecía y generaba riquezas económicas para sus dueños y gestores, la salud de la población circundante fue mermando rápidamente. Hay una poesía terrible en las denominaciones de los grupos de resistencia: “Los hombres verdes” refieren al color de sus órganos expuestos a los contaminantes, principalmente a los que emanan de la fundición del cobre que, a su vez, es conocido como “El sueldo de Chile”, o las “Mujeres en zona de sacrificio en resistencia”; son expresiones que pertenecen al elocuente lenguaje del activismo, que toma sus luchas, sus injusticias y las convierte en consigna, en modo de activar empatía, de sumar fuerza a su relato y a su actuar. Son grupos de personas movilizadas por los impactos físicos y sociales que el crecimiento económico ha dejado en sus territorios. El trabajo por la defensa de la vida requiere más de una estrategia. Desde el punto de vista de lo institucional, de la toma de decisiones en la esfera del poder, hemos activado mecanismos de tipos: administrativos y judiciales, nacionales e internacionales, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, colaborativos y litigiosos. Entre estos, vale la pena destacar un par de logros (aunque sean oscurecidos por la realidad circundante).

En primer lugar y durante el año 2009, se aprobó el permiso ambiental de la cuarta termoeléctrica de carbón de la transnacional Aes Gener, Campiche, para ser construida en una “zona de amortiguación”, definida por el plano regulador territorial como no apta para industrias contaminantes, por tratarse de una zona saturada y peligrosamente cercana a la población. La comunidad organizada presentó

una acción de garantías constitucionales que finalmente fue acogida por la Corte Suprema por provocar “un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Cinco meses después de la sentencia, comenzó el *lobby* de la embajada de Estados Unidos, que terminó con la formalización de un Decreto Supremo, firmado por el gobierno de turno y que modificó la ordenanza territorial a favor de la empresa, permitiendo su instalación y puesta en marcha (Figueroa, 2011). Los índices de contaminación se elevaron significativamente después de que se inició el funcionamiento en la unidad carbonera.

A dos kilómetros de ese lugar, en la escuela La Greda, durante el año 2011, estudiantes y profesores sufrieron síntomas severos de intoxicación. Si bien no era la primera vez que ocurría, la gravedad y masividad de la situación obligó a la Cámara de Diputados a instaurar una Comisión Investigadora que estableciera las responsabilidades de la estatal Codelco, habiendo identificado el gas venenoso como SO<sub>2</sub>, emanado por la chimenea de la fundición de cobre. Dicha Comisión terminó con un informe lapidario: el Estado había abandonado a la comunidad de Concón, Quintero y Puchuncaví y urgía que se tomaran acciones al respecto. No obstante, se continuaron aprobando proyectos de inversión en el complejo industrial. Recientemente, durante el segundo semestre de 2018, al menos 1700 personas presentaron síntomas de envenenamiento por gases desconocidos. La sinergia y falta de registro de contaminantes ha hecho imposible que, a la fecha, sepamos cuál o cuáles fueron los gases venenosos, si bien se ha especulado sobre la presencia de algunos compuestos orgánicos volátiles, prohibidos por la normativa internacional. En dicha oportunidad, una nueva comisión investigadora concluyó con otro lapidario informe: la prueba del incumplimiento de las recomendaciones del Informe de 2011, y la perpetuación del abandono del Estado (Honorable Cámara, s. f.).

A propósito de los mismos hechos, en mayo de 2019, la Corte Suprema dictó una importante sentencia para la justicia ambiental (Donoso y Timm, 2019), reconociendo las vulneraciones de los derechos humanos de las y los habitantes de la “zona de sacrificio”, en la que estableció que el origen de dichas vulneraciones está en el crecimiento industrial desmedido y desregulado, y que hubo una omisión del Estado por no prever y no actuar oportuna y correctamente ante la crisis sanitaria (Rol 5,888-2019), además de ordenar una serie de medidas a las distintas autoridades para “restaurar el imperio de Derecho”. A más de un año de su expedición y, a pesar de los requerimientos hechos por la ciudadanía, dicha sentencia se encuentra incumplida. Finalmente, tras años de evidencia que vincula el dióxido de azufre que emite la estatal



Codelco para generar “el sueldo de Chile” con el deterioro a la salud de las personas, la decisión económica de su Directorio más reciente fue cerrar la fundición de cobre (solo la fundición, no la refinería), pues la inversión requerida para internalizar los costos ambientales no era rentable. Restan los mecanismos institucionales para que ello ocurra realmente y de buena manera, sucesos que son pacientemente esperados por las comunidades afectadas.

### Las “zonas de sacrificio” existen bajo la mirada pasiva de un Estado ausente

28  
Alejandra Donoso Cáceres

En cada uno de estos episodios, la autoridad tuvo la oportunidad de actuar, de poner en ejecución el aparato del Estado para dar solución a las graves y ya sistemáticas vulneraciones de los derechos humanos que sufren las y los habitantes de las “zonas de sacrificio”, sin embargo, la situación perdura. Cuando el Estado tuvo la oportunidad de cumplir la ley y de no seguir ampliando el cordón industrial, resguardando la última franja de amortiguación que quedaba en la planificación territorial, ante presiones exteriores, y en contra de la decisión que tomó la Corte Suprema en la que se rechazó el permiso ambiental de la termoeléctrica Campiche, la empresa se instaló tras una modificación del instrumento de planificación territorial para eliminar la restricción. El acto modificatorio se dictó el 31 de diciembre de 2009 (Decreto Supremo 68/2009). Así mismo, cuando el Estado tuvo la oportunidad de actuar frente a la masividad de las intoxicaciones en menores preescolares, decidió cerrar la escuela –no las industrias– y trasladarla a dos kilómetros de distancia de la fuente emisora (Correa, 2013; Ministerio de Educación, s. f.), lo cual no resguarda la salud de las y los menores, que seguían expuestos a la contaminación.

En fin, cuando el Estado se vio enfrentado a miles de personas envenenadas con gases tóxicos, aceleró la actualización del plan de prevención y descontaminación, pendiente desde el año 2011 (cuando ocurrió la intoxicación masiva anterior), además, decretó una “gestión de episodios críticos”, que pronostica las condiciones meteorológicas y sugiere disminuir la actividad física de las personas, que se viene aplicando sin mejoras a razón de 360 días al año. Las consecuencias de la desigualdad son así de palpables y así de indignantes. No debería extrañarnos tanto el “despertar de Chile”, pues es una consecuencia lógica de años de este tipo de abusos de poder, una especie de grito de auxilio, el “¡Basta!” de Mafalda. Porque en Chile, a pesar de la imagen que sus cifras macroeconómicas han proyectado hacia el exterior durante la democracia pactada, la riqueza que se ha generado ha sido

pésimamente distribuida (OECD, 2017). Bajo este panorama, el anuncio del cierre de la fundición de Codelco resalta como una política pública anhelada por las comunidades forzadas a respirar veneno y sufrir las consecuencias, y es de esperar que su ejecución sea llevada a cabo de manera expedita y resguardando los derechos sociales y ambientales de las y los habitantes y trabajadores.

En la “zona de sacrificio” de Concón, Quintero y Puchuncaví, a pesar de la declaración de saturación y de los constantes episodios de contaminación aguda (más visibles incluso que los efectos crónicos de la exposición), el complejo industrial Ventanas continúa expandiéndose hasta la actualidad, encontrando mecanismos institucionales que legitiman la actividad industrial en un lugar donde las cifras de enfermedades por contaminación no son transparentes, estableciendo medidas de mitigación, reparación o compensación en un lugar donde ya prácticamente no hay pesca ni agricultura, beneficiándose de la falta de información y de regulación propias de un Estado ausente. Los mecanismos institucionales que hacen posible este “sacrificio” y su perpetuación, permiten afirmar que el modelo económico, caracterizado por una dinámica de apropiación y de acumulación por desposesión (Harvey, 2005), ha crecido hasta límites que vulneran los derechos humanos; que la magnitud de la extracción, con sus enclaves y soportes, es todo lo amplia y lo profunda que requiere la economía mundial; que el crecimiento descansa sobre el despojo de la naturaleza y de las personas; que engendra el desprecio por los derechos de quienes han sido arrojados al margen de la pobreza, y que ese despojo se convierte en riqueza especuladora generada en el abuso, destinada a ampliar cifras económicas que esconden sus (vergonzosos) costos.

Entonces, si ante la evidencia y la magnitud de las vulneraciones de los derechos humanos, las autoridades, por su parte, omiten ejercer sus atribuciones, en específico, su respeto, promoción y garantía, mediante la planificación, una regulación, una fiscalización, manteniendo la fuente de las vulneraciones sin mayores restricciones, resulta que tendremos algunos elementos para sospechar, al menos, que se trata de una decisión, de un costo que se está dispuesto a asumir, que realmente se han dejado personas destinadas al “sacrificio” sobre el que descansa el producto interno bruto (PIB). Esa sospecha se ha vuelto lugar común por la evidencia del abuso, y se convierte en un grito masivo que no tolera más esta y otras consecuencias del modelo económico; que denuncia el abuso del despojo del agua y del aire, pero también del derecho a la salud, educación y vivienda; la apropiación del producto del trabajo para la especulación financiera, y que todo eso ocurra mientras las personas, en múltiples niveles, en la precarización y el

endeudamiento, en la falta de acceso, sufren la inequidad. El abuso ha alcanzado magnitudes tales, que ya no se puede esconder bajo la alfombra ni justificar en la macroeconomía. Por todo esto, es importante observar las consecuencias de la forma en que nos hemos relacionado con la naturaleza, cuestionar un modelo de crecimiento económico ilimitado, que despoja naturaleza y derechos, que descansa sobre la precarización de la vida de quienes son más vulnerables, de quienes han sido arrojados al margen de los beneficios de la sociedad, quienes soportan los “costos necesarios” para el “beneficio” de otros pocos. La propuesta de constitución redactada por la Convención Constitucional, aún no aprobada por la ciudadanía, en el plebiscito de septiembre de 2022, tiene el mérito de haber puesto la discusión sobre la mesa e invitarnos a una reflexión profunda, que es al mismo tiempo individual y colectiva.

### Las “zonas de sacrificio” y el “despertar de Chile”

Es urgente entender que no solo “lo social es también ambiental”, sino que son la misma cosa. La “cuestión social” es la misma “cuestión ambiental”, tiene sus mismas causas y consecuencias. Los sistemas humanos y naturales, en crisis, nos piden modificar nuestros patrones de conducta, esos que se basan en la idea de un planeta infinito, de consumo irreflexivo que se sustenta en la depredación de la vida y de los territorios, a escalas que han requerido la política de destrucción vigente. Es urgente pensar un cambio de modelo que haga posible la vida.

La masividad de los cuerpos-territorios haciendo crisis por la contaminación a que son expuestos tiene un correlato con la masividad de las voluntades, reconociendo y queriendo acabar con tanta injusticia a la que las expone un sistema que se sirve de ellas, pero no las respeta ni honra sus vidas. Esto nos habla de lo transversal y estructural de lo injusto, y de que es urgente la movilización y lograr cambios a gran escala, pues el planeta no resiste mucho tiempo más bajo esta dinámica (IPCC, 2021). Así como en noviembre de 2018 fueron cientos de personas las que resultaron intoxicadas con gases venenosos, hasta la fecha desconocidos, un año después fueron cientos de miles quienes salieron a las calles a protestar porque se volvió evidente que sobre sus vidas descansan las consecuencias del “milagro económico chileno”. La “olla de presión” que explotó en la “zona de sacrificio” era el preámbulo de la explosión del malestar chileno porque, así como era previsible la crisis sanitaria en un escenario de contaminación excesiva y abandono, la crisis social era previsible ante tanta inequidad y abuso. El descontento consciente y movilizado puso al centro las precariedades que nos

alejan de una vida que merezca ser vivida, “hasta que la dignidad se haga costumbre” se leía en las paredes del Chile de octubre, hace tres años. Y si bien aún no tenemos un texto constitucional que haga eco de estas demandas, la discusión ya está planteada, las expectativas creadas y las promesas pendientes de cumplirse.

La oportunidad que ha otorgado el “despertar” del pueblo chileno es muy valiosa, pues logra evidenciar y permite cuestionar las bases sobre las que descansan las injusticias, desde la rabia que provocan, poniendo en jaque el abuso de poder. Es relevante, además, porque obliga a reflexionar sobre el abuso de poder que está a la base de la injusticia, en sus múltiples dimensiones: el abuso de poder del Norte sobre el Sur; el abuso de poder de hombres sobre mujeres; de personas adultas sobre niñas, niños y adolescentes; el de seres humanos sobre cualquier otra especie; de ricos sobre pobres, en fin, el abuso sobre la naturaleza, sobre nuestra madre tierra que nos cobija.

Sostengo que, en términos generales, el momento histórico que abre la conciencia de la injusticia es beneficioso para la reflexión en torno a nuestras relaciones, a fin de poder mirar de frente y de una manera reflexiva nuestras conductas patriarcales, contaminadas de una estructura abusiva tejida culturalmente, servil al actual sistema económico imperante, cuyas desigualdades descansan sobre la miseria de quienes han sido marginados de los beneficios, de las y los que soportan las cargas de la injusticia ambiental y del despojo de los bienes comunes. Es importante la reflexión, pues, ha sido tal la magnitud del abuso, que incluso conseguimos instaurar una era geológica, pero en tiempos humanos: el Antropoceno (Crutzen, 2000), agotamos el planeta. Tal vez podamos revertirlo y vivir en armonía con la naturaleza.

## Referencias

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2019). Situación de las “zonas de sacrificio” ambiental y las consecuencias de la actividad industrial sobre el derecho a la salud en Chile”, 171° periodo de sesiones. Organización de los Estados Americanos (OEA).
- Federicci, S. (2010). *Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Traficante de sueños.
- Figueroa, J. P. (2011). *Las gestiones conjuntas de los gobiernos de Chile y EE.UU. para salvar a termoeléctrica de AES Gener*. Ciper.
- Folchi, M. (2006). *Historia Ambiental de las labores de beneficio en la minería del cobre en Chile, siglos XIX y XX* (Tesis de Doctorado). Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, 2006.

- Gargallo, F. (2014). *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos de nuestra América*. Editorial Corte y Confeción.
- Gudynas, E. (2018). *Extractivismos: el concepto, sus expresiones y sus múltiples violencias. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 143, pp. 61-70.
- IPCC (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/>
- Lemebel, P. (2009). *Carta abierta al candidato presidencial Sebastián Piñera*. Socompa.
- Madrid, E. et al. (2022). Arsenic concentration in topsoil of central Chile is associated with aberrant methylation of P53 gene in human blood cells: a cross-sectional study. *Environmental Science and Pollution Research*.
- Malman, S. et al. (1995). El trasfondo socioeconómico del conflicto ambiental de Puchuncaví. *Ambiente y Desarrollo*, XI (4).
- Muñoz, T. y Pool, C. (2011). En el oleaje del olvido. *Un rescate a la tradición cultural de los pescadores artesanales de la localidad de Las Ventanas*. Fondo Nacional de la Cultura y las Artes.
- Muñoz, T. (2012). La pesca invisible. Análisis sobre las transformaciones de la actividad pesquera artesanal en Caleta Ventanas (Tesis para optar al grado de Licenciada en Antropología), Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago.
- Neaman, A. y otros (2019). Soil and indoor dust as environmental media of human exposure to As, Cd, Cu, and Pb near a copper smelter in central Chile. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology* 54 (2019) 156-162.
- Honorable Cámara (s. f.). Informe Comisión Especial Investigadora sobre Causas de alta Contaminación Ambiental, especialmente en Concón, Quintero y Puchuncaví, y de Responsabilidades en Ejecución del plan de Descontaminación.  
<https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=45601&prmTIPO=INFORMECOMISION>
- Correa, P. (2013). Inauguración de nueva escuela de La Greda: expertos califican medida como “insuficiente”. *DiarioUChile*. <https://radio.uchile.cl/2013/09/30/inauguracion-de-nueva-escuela-de-la-greda-expertos-califican-medida-como-insuficiente/>.
- Ministerio de Educación (s. f.). Escuela básica La Greda. Proyecto Educativo Institucional. <http://www.wfs.mineduc.cl/Archivos/infoescuelas/documentos/1867/ProyectoEducativo1867.pdf>

## **Extractivism: Abuse and Injustice in “Sacrifice Zones”**

*Alejandra Donoso Cáceres*

*To live aware of the danger of breathing, drinking the poison that accumulates in one’s body and turns it green. To be on the frontlines of sickness, degradation, contamination, injustice. To bear a sentence proffered by the history of the powerful, sustained by disregard for a life of dignity, knowing that everything stems from abuse and dispossession, that the state remains silent, that there is no escape, that the only thing left to do is to question, resist, demand, and defend.*

*This chapter is dedicated to the dignified inhabitants of Chile’s “sacrifice zones” and their struggle for justice.*

**Imagine a story that brings together megaprojects,** the concentration of power, and environmental injustice, a convergence that is unmistakable to the eyes of those fighting to safeguard human rights and the environment. This narrative, a structurally violent one, follows the broader pattern of economic growth—a natural consequence of the ambitions of a handful of individuals who hold the reins, and for whom this narrative, like the limits of the universe, seems an irrelevant reality.

“Sacrifice zones,”<sup>1</sup> a concept coined by their inhabitants as a way of highlighting the injustice they experience, are

areas of human settlement that have suffered environmental devastation as a result of industrial development. This devastation has direct implica-

---

1 “Sacrifice zone” is not an established legal concept, nor would it be accurate to say that all contaminated zones are sacrifice zones, as it is a notion coined by the inhabitants of these zones. In Chile, the National Human Rights Institute, in its 2014 annual report, acknowledged the existence of such zones. This recognition was partly the result of advocacy by the inhabitants of these zones, who have been calling on the government to take measures to restore the dignity of local communities and to draw attention to the state’s negligence in allowing these zones to exist (Instituto Nacional de Derechos Humanos 2014).

tions for the full exercise of fundamental rights, including the rights to life, to health, to education, to work, to food, and to housing. In these areas, environmental degradation has placed communities in a situation of vulnerability and impoverishment.<sup>2</sup>

Uninhibited economic growth, an absent state, and the systematic violation of human rights are key traits of these areas. In “sacrifice zones,” for example, it is common to smell almonds in the air, a sign of cyanide; to smell gas, indicating a hydrocarbon leak in one or more (or all) of the polluting industries that occupy these communities; to experience tightness in one’s throat, itchy skin, a headache, nausea, or dizziness; or for the internal organs of inhabitants to turn green as a result of contamination.<sup>3</sup>

In this chapter, I wish to explore the nexus between the extractivist nature of the North-South dynamic and one of its most invizibilized and urgent consequences: Chile’s “sacrifice zones.” The causal connection between unchecked economic growth and human rights violations is visible to the naked eye. It can also be seen as a subject of study in which the state’s absence plays a decisive role, shaping and deepening the costs of a misunderstood “development” that translates into marginalization and poverty and which slips by unnoticed during decision-making processes.

Among the most eloquent evidence of Chile’s extractivist policy are the so-called sacrifice zones. One of these zones—that of Concón, Quintero, and Puchuncaví in the Chilean Valparaíso Region—is an example of how inhabitants have organized for years to fight the industry’s abuses and the state’s passivity. My colleagues and I at the nongovernmental organization Defensoría Ambiental have been actively involved in this case, working with residents to draw on institutional and organizational channels to respond to the magnitude of the damage that they have suffered. We use a complex and demanding defense strategy that goes far beyond calls for the oft-heard cosmetic promise of mitigation.

2 See document signed by the mayors of Huasco, Tocopilla, Puchuncaví, Quintero, and Coronel (May 2014), <http://www.ojoconelparlamento.cl/sites/default/files/minuta/S%208a%20Peticiones%20conclave%20alcaldes%20zonas%20de%20sacrificio.pdf>; and “Acta cónclave zonas de sacrificio en resistencia, Ventanas 11, 12 y 13 de noviembre del 2016,” <http://www.terram.cl/wp-content/uploads/2016/11/Declaración-Cónclave-Zonas-de-Sacrificio-en-Resistencia-2016.pdf>.

3 The case of the “green men,” former workers at the copper smelter, is well known. The widows of these men were able to get their husbands’ bodies exhumed in order to confirm, based on the color of their organs, what they had suspected all along: that the workers’ deaths had been caused by the poisonous fumes caused by the mixing of gases at the copper smelter.



The Ventanas industrial complex, occupying 28,800 hectares of land, includes 14 different companies, some of them belonging to the state. Inaugurated in 1964, the complex was originally made up of three companies: the Empresa Nacional de Minería's copper smelter and refinery, now run by the state-owned Corporación del Cobre (Codelco); the Ventanas I coal- and oil-fired power plant, with 115,000 kilowatts of power output; and Chilectra, today owned by the multinational company AES Gener, which began operating in 1958. In 1992, the companies that made up the Ventanas industrial complex presented a decontamination plan written by and for themselves, which was subsequently approved by the relevant state authority. In 1993, the zone was declared to be saturated with sulfur dioxide and particulate matter.

Today, even in the wake of a historic Supreme Court ruling, the situation has only gotten worse. Over the years, as the industrial complex has grown and its pollutants have accumulated, the health impacts on residents have worsened, gravely affecting their rights to life, bodily integrity, health, and a healthy environment. A number of studies have been conducted by researchers from various disciplines to investigate the situation faced by residents. These studies also attest to the changes that the bay has undergone and the impacts of the growth of the industrial complex (Malman et al. 1995; Folchi 2006; Muñoz and Pool 2011; Muñoz 2012; Bearasaluce et al. 2019; Madrid et al. 2022). A mere four years after the complex's inauguration, the soil was completely eroded, accumulating heavy metals on its surface and permeating the groundwater. Since then, acute episodes of contamination have been increasingly commonplace, including the massive poisoning of school children in 2011 and the health crisis in late 2018 in which at least 1,700 people were poisoned by toxic fumes.

This hostility toward residents calls for a vibrant, ardent, idealistic, and determined response that necessarily leads to a loving and committed activism that stands up against the horrifying normalization of poisoned air, of coal washing up on seashores, of school closures due to intoxications, of contaminated sea and land creatures, of people getting sick and dying just from daring to drink water or breathe.

By contrast, the state's decisions are reduced to empty words that—reinforced by a constitutional framework that entrenches abuse—deepen injustice, even when it has been widely denounced.

Appallingly, those who make the decisions are aware of this reality, are informed of the situation, have tools at their disposal for safeguarding people's rights—and yet their actions seem to do the opposite of protecting human rights.

Our country's roots can be found in this lack of empathy and humanity—this is the reality that Chileans, fed up with being mistreated, are beginning to see and name. The 2018 protests calling for “no more sacrifice zones” were the prelude to the country's 2019 uprising. Too many facets of life are being regulated by injustice and institutional failure. The social outburst (known in Chile as the *Estallido Social*), as well as the country's fledgling constitutional process, are symptoms of a discontent that has not been addressed and, as a result, is still simmering.

### “Sacrifice Zones” as a Product of the Extractivist Model

Extractivist policies are pervasive across the global South. The global North, in order to satisfy its appetite for goods and services, relies on raw materials from Africa, Asia, and Latin America. According to Eduardo Gudynas (2018), this type of appropriation of natural resources has three key traits: the resources are extracted in large volumes or high intensity, they are destined largely for exportation to global markets, and they take the form of raw materials.

In other words, extractivist policies—or the extractivist model—can occur only within the framework of the neoliberal model, as a late and deepened phase of capitalism that weighs justice against freedom, with decision-making processes leaning toward the latter on the basis of the distorted dogma of the “invisible hand,” of the belief that the free market can satisfy a supposed infinitude of human needs, ignoring the injustice hiding behind such an idea. In this regard, two ideas require attention.

First is the abuse of power (Cargallo 2013) that has been legitimized at an ideological level throughout history. According to the Bible, “Then God said, ‘Let us make mankind in our image, to be like us. Let them be masters over the fish in the ocean, the birds that fly, the livestock, everything that crawls on the earth, and over the earth itself.’” In other words, the most significant book during colonization—the most authoritative voice of all, God—granted men (not women) absolute dominion over nature, at a time when the ideas of “absolute” and “nature” were not yet in conflict. This allowed those who enjoyed the privilege of that power to wield it abusively and without limits (Rivera 2013). Today we can see how this unrestrained depredation has left the planet on the brink of extinction (Intergovernmental Panel on Climate Change 2021).

Second is the brutal and agonizing absurdity of this form of resource management: neoliberal capitalism, especially extractivism, is

based on the poverty of the communities it plunders. Wherever economic wealth is extracted, a path of misery and pain follows in its wake, a sort of modern colonization (ibid.) that ravages life in the communities, which is explained (I have only been able to find this unjustified explanation) by the blindness with which natural resources are viewed, under the paradigm of the abuse of the appropriation of nature (and whatever else can be converted into merchandise). For Pedro Lemebel (2009), too, this phenomenon is incomprehensible: “How can there be people who own so much of the horizon? This gluttony of having so much seems obscene.”

It is in these territories where the state has decided to sacrifice the population (Folchi 2006) and where human rights violations abound. Environmental injustice, in its distributive, participatory, and ecological dimensions (Hervé 2010; Martínez 2016), prevails in these spaces, and it is the only thing that prevails—a type of Wild West of the rule of law, where the state is wittingly absent. This is the perception of the communities who inhabit these places—communities who, together with others who face similar experiences in other regions, see themselves as being “in sacrifice.”

A state that allows this to happen fails to do precisely what it is meant to do, given that the *raison d’être* of a democratic state based on the rule of law is the protection of the fundamental rights of all its people. It is extremely concerning when the state, whose job is to foster the common good and to conserve nature, behaves ideologically, subjugating what it should be protecting, thus becoming a failed state, defending a false promise of economic growth even when the Supreme Court—the country’s highest judicial authority—has recognized this injustice, described it, and ordered its reversal, to no avail.

### **“Sacrifice Zones” as Harmful to the Health and Life of Ecosystems and Humans**

Physical ailments are commonplace in “sacrifice zones.” Even those who go for just a visit often find that upon their return they have a pulsating headache, nausea, dizziness, and even vomiting or hives. To inhabit these areas is to be immune to the detriments to life and health, to bear witness to the contempt for nature. In the sacrifice zone of Concón, Quintero, and Puchuncaví, it is normal for any one of the five ports to cause a spill at any moment. It is also normal for the air quality monitoring stations to show elevated levels of harmful pollutants. Even the lack of adequate rules and standards has become normalized.

According to the World Health Organization, disorders of the respiratory, cardiovascular, and nervous systems, whether acute or chronic, are directly related to the gas emissions of polluting industries. It is not surprising that these types of disease are also common among residents of this sacrifice zone. Even more unacceptable is the fact that there are no official figures on these illnesses (Cortés 2019) despite the abundance of evidence, including the documentation of genetic mutations resulting from prolonged exposure to heavy metals (Madrid et al. 2022).

In this sacrifice zone, as the Ventanas industrial complex has grown and generated riches for its owners and managers, the local population's health has rapidly declined. The names of the resistance groups are painfully poetic: the "Green Men" refers to the color of the bodily organs exposed to pollutants, largely those from the copper smelter, which is simultaneously referred to as "Chile's salary"; or "Women in the Sacrifice Zone in Resistance." These are expressions belonging to the eloquent language of activism, which translates injustices and struggles and into slogans, thereby generating empathy and adding strength to their stories and actions. These groups are mobilized by the physical and social impacts that economic growth has wreaked on their communities.

Working in defense of life calls for more than just a strategy. From an institutional perspective, including decision-making processes in the spheres of power, we have drawn on administrative and judicial tools, national and international ones, jurisdictional and non-jurisdictional ones, collaborative and litigious ones. A number of successes in this regard (even if clouded by the current reality) are worth noting.

In 2009, an environmental license was approved for Campiche, the fourth coal-fired power plant of multinational AES Gener to be built in a "buffer zone," defined by zoning regulations as land that is unsuitable for polluting industries given its status as a saturated zone and its proximity to the population. The affected community filed a legal complaint that was eventually heard by the Supreme Court, which held that there was "an evident damage to the environment in which petitioners live, violating their constitutional right to live in an environment free of contamination." Five months after the ruling, lobbying by the US Embassy led to the issuing of a supreme decree by the Ministry of Housing and Urban Planning that modified zoning regulations to allow the company to continue with Campiche's construction and rollout (Figueroa 2011). Pollution indices saw a significant rise once the plant began operating.

Two kilometers away, in La Greda elementary school, students and teachers presented symptoms of severe intoxication in 2011. Though this was not the first such incident, the severity and scale of the crisis forced the Chamber of Deputies to establish a commission of inquiry to determine the extent of responsibility of state-owned Codelco, having identified poisonous sulfur dioxide emanating from the copper smelter's chimney. The commission's final report was damning: the state had abandoned the community of Concón, Quintero, and Puchuncaví, and urgent action was needed. However, investment projects in the industrial complex continued to win approval.

More recently, in late 2018, at least 1,700 people presented symptoms of gas poisoning from an unknown source. The combination of contaminants, coupled with their lack of registration, has made it impossible, to this day, to know what the poisonous gases were, although there has been speculation about certain volatile organic compounds prohibited under international law. Yet again, a commission of inquiry produced a scathing report: a failure to comply with the recommendations of the 2011 report, along with the state's continued failure to intervene (Honorable Cámara n.d.).

Based on these events, the Supreme Court issued a landmark ruling for environmental justice in May 2019, recognizing the violations of the human rights of residents of the "sacrifice zone." According to the court, the violations were the result of disproportionate and unregulated industrial growth, and the state committed an omission by not preventing and not taking timely action in the face of the public health crisis.<sup>4</sup> It also ordered various bodies to implement measures aimed at "restoring the rule of law." More than a year after this ruling, and in spite of the demands of citizens, the sentence has yet to be complied with.

Finally, after years of evidence linking Codelco's sulfur dioxide emissions (in the name of generating "Chile's salary") with residents' deteriorating health, the company's board recently decided to gradually shutter the copper smelter (just the smelter, not the refinery) since the investment required to internalize the environmental costs was not profitable. What remains to be seen is whether this closure will actually happen—as the affected communities are patiently awaiting.

---

4 Supreme Court, Rol. 5,888-2019 (May 28, 2019).

## “Sacrifice Zones” under the Passive Eye of an Absent State

In each of these cases, relevant authorities had the opportunity to take action, to draw on the state apparatus to address the serious and systematic human rights violations being suffered by residents of the “sacrifice zones.” Yet little was done.

When the state could have enforced the law and reined in the industry by protecting the last remaining buffer in the zoning regulations, instead—bowing to external pressure and ignoring the Supreme Court ruling invalidating the environmental permit for the Campiche power plant—it allowed the plant’s construction by modifying the zoning regulations. It did this on December 31, 2009, via Supreme Decree 68/2009.

Moreover, when the state had the chance to take action to address the massive intoxication of elementary school children, it chose to close the school—not the factories—and to move it two kilometers away from the emitting source (Correa 2013; Ministry of Education n.d.), thereby failing to safeguard the health of the children, who were still being exposed to toxic fumes.

Lastly, when the state was confronted with thousands of people poisoned by toxic fumes, it finally updated the pollution prevention decontamination plan that had been pending since 2011 (when the previous massive poisoning occurred). It also rolled out a “critical episode management” system that forecasts weather conditions and recommends that people limit their physical activity when air quality is poor—a recommendation that has been applied 360 days a year.

The consequences of inequality are obvious and infuriating. We shouldn’t be surprised by the “awakening of Chile,” as it is a logical consequence of years of the abuse of power—a kind of cry for help, Mafalda’s exclamation of “Enough!” Because in Chile, despite the rosy economic image projected to the outside world since the country’s transition to democracy, the wealth that has been generated has been poorly distributed (OECD 2018).

Against this backdrop, Codelco’s decision to close the copper smelter comes as a welcome relief to the communities forced to breathe the poison and bear the consequences—and the hope is that this closure will be executed expeditiously and in a way that protects the social and environmental rights of residents and workers.

In the sacrifice zone of Concón, Quintero, and Puchuncaví, despite its being declared a saturated zone and despite constant incidents of acute intoxication (which are more visible than the chronic effects of

exposure), the Ventanas industrial complex continues to grow. It has been able to do this by drawing on institutional mechanisms that legitimize industrial activity in a place where data on pollution-related illnesses are not transparent, establishing mitigation, reparation, and compensation measures in a place where there is basically no longer any fishing or agriculture, and taking advantage of the lack of information and lack of regulation by the state.

The institutional mechanisms that allow this “sacrifice” to occur are a testament to the fact that the economic model based on appropriation and accumulation by dispossession (Harvey 2004) has grown to extremes that violate human rights; that the magnitude of extraction is as broad and deep as the global economy requires; that growth rests on the dispossession of nature and humans; that such dispossession leads to contempt for the human rights of those who have been thrown to the margins; and that this dispossession becomes speculative wealth generated by abuse, destined to enlarge economic figures that hide their (shameful) costs.

Thus, if the state—even when faced with an abundance of evidence of human rights abuses—fails to exercise its duty to respect, promote, and fulfill human rights through planning, regulation, and oversight, instead allowing the source of violations to continue uninhibited, we have reason to suspect that this is a conscious decision. It is a cost that the state is willing to assume; the state has decided to “sacrifice” communities in service of the gross domestic product.

This suspicion has grown in light of the evidence of abuse, and it has transformed into a loud cry against the state’s economic model, against the plundering of air and water, against the impairment of the rights to health, education, and shelter, and against the appropriation of the work product for financial speculation. All of this is taking place while people suffer inequity on multiple levels—in instability, in debt, in lack of access. The abuse has reached such a scale that it can no longer be swept under the rug or justified under a macroeconomic perspective.

For these reasons, it is critical that we acknowledge the consequences of our relationship with nature and question the model of uninhibited economic growth that leads to environmental destruction and rights violations and that rests on the marginalization of the most vulnerable, who have been pushed to the brink, who bear the “necessary costs” for the “benefit” of a few. The proposed constitution drafted by the Constitutional Convention, which will be voted on in a national referendum in September 2022, should be credited with putting this



issue on the table and inviting us to engage in a deep reflection that is at once personal and collective.

### “Sacrifice Zones” and the “Awakening of Chile”

It is critical to understand not only that “the social is also environmental” but that these two things are one and the same. The human and natural systems, which are in crisis, are begging us to modify patterns of behavior that are based on the idea of an inexhaustible planet, on reckless consumption that relies on the pillaging of land and life on a scale that requires policies of destruction. We must envision a change of model that makes life possible.

The magnitude of bodies-territories under crisis as a result of contamination is paralleled by the magnitude of wills eager to put an end to the injustice being wreaked by a system that uses them but doesn't respect them or honor their lives. This reveals the cross-cutting and structural nature of the injustice and highlights the urgent need to mobilize for large-scale change, because the planet cannot support this dynamic much longer (Intergovernmental Panel on Climate Change 2021).

Just as in November 2018 hundreds of people were poisoned by toxic fumes that remain a mystery to this day, a year later hundreds of thousands took to the streets to protest the fact that their lives were being sacrificed in the name of the “Chilean economic miracle.” The pressure cooker that exploded in the sacrifice zone was the preamble to the explosion of Chilean unrest. Because just as the public health crisis was foreseeable against a backdrop of disproportionate contamination and neglect, so too was the social uprising foreseeable in the face of so much inequity and abuse. This conscious and mobilized discontent shone a light on the instability that distances us from a life worth living; “until dignity becomes a habit” was a common slogan seen scribbled on building walls in Chile in October 2019. And while we are yet to have a constitution that echoes these demands, the issue has been placed in the spotlight, expectations have been set, and promises are waiting to be fulfilled.

The opportunity provided by Chile's “awakening” is a valuable one because it unveils, and allows us to question, the roots of injustice. It is also important because it forces us to reflect on the various dimensions of the abuse of power that lie at the root of injustice: the abuse of power by the global North over the global South; the abuse of power by men over women; by adults over children and adolescents;



by humans over all other species; by the rich over the poor. In short, the abuse of power over nature, over our Mother Earth that shelters us.

I believe that, generally speaking, this historical moment that is raising our awareness of injustice is beneficial for reflecting on our relationships. It allows us to come face to face with our patriarchal behavior, which is facilitated by a culturally ingrained abusive structure that is subservient to the current economic order whose inequalities rest on the misery of the marginalized, of those who bear the burden of environmental injustice and the dispossession of the commons. Such a reflection is important because the magnitude of abuse has been so great that we have even managed to ring in a new, human-induced geological epoch: the Anthropocene (Crutzen and Stoermer 2000). We are depleting the planet. Perhaps it is not too late to reverse this trend and live in harmony with nature.

## References

- Bearasaluce, Maite, Pedro Mondaca, Marta Schumacher, et al. 2019. "Soil and Indoor Dust as Environmental Media of Human Exposure to As, Cd, Cu, and Pb Near a Copper Smelter in Central Chile." *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology* 54: 156–62.
- Correa, Paula. 2013. "Inauguración de nueva escuela de La Greda: Expertos califican medida como 'insuficiente'." *DiarioUChile*, September 30. <https://radio.uchile.cl/2013/09/30/inauguracion-de-nueva-escuela-de-la-greda-expertos-califican-medida-como-insuficiente/>
- Crutzen, Paul, and Eugene Stoermer. 2000. "The 'Anthropocene'." *Global Change Newsletter* 41: 17–18.
- Figueroa, Juan Pablo. 2011. "Las gestiones conjuntas de los gobiernos de Chile y EE.UU. para salvar a termoelectrica de AES Gener." *Ciper*, March 1. <https://www.ciperchile.cl/2011/03/01/las-gestiones-conjuntas-de-los-gobiernos-de-chile-y-ee-uu-para-salvar-a-termoelectrica-de-aes-gener/>
- Folchi, Mauricio. 2006. "Historia ambiental de las labores de beneficio en la minería del cobre en Chile, siglos XIX y XX." Doctoral thesis, Universitat Autònoma de Barcelona.
- Gudynas, Eduardo. 2018. "Extractivisms: Tendencies and Consequences." In *Reframing Latin American Development*, edited by Ronaldo Muck and Raúl Delgado Wise. New York: Routledge.
- Harvey, David. 2004. "The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession." *Socialist Register* 40: 63–87.
- Hervé, Dominique. 2010. "Notion and Elements of Environmental Justice: Guidelines for Its Implementation in Territorial Planning and Strategic Environmental Evaluation." *Revista de Derecho* 23: 9–36.

Honorable Cámara. n.d. *Informe Comisión Especial Investigadora sobre Causas de alta Contaminación Ambiental, especialmente en Concón, Quintero y Puchuncaví, y de Responsabilidades en Ejecución del plan de Descontaminación*. <https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTipo=SIAL&prmID=45601&formato=pdf>

Instituto Nacional de Derechos Humanos. 2014. *Informe anual 2014: Situación de los derechos humanos en Chile*. Santiago: Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Intergovernmental Panel on Climate Change. 2021. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis; Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lemebel, Pedro. 2009. "Carta abierta al candidato presidencial Sebastián Piñera." *Socompa*.

Madrid, Eva, Isabel Gonzalez-Miranda, Sergio Muñoz, et al. 2022. "Arsenic Concentration in Topsoil of Central Chile Is Associated with Aberrant Methylation of P53 Gene in Human Blood Cells: A Cross-Sectional Study." *Environmental Science and Pollution Research* 29: 48250–9.

Malman, Sanford, Francisco Sabatini, and Guillermo Geisse. G. 1995. "El trasfondo socioeconómico del conflicto ambiental de Puchuncaví." *Ambiente y Desarrollo* XI (4): 49–58.

Ministry of Education. n.d. *Escuela básica La Greda*. <http://www.fs.mineduc.cl/Archivos/infoescuelas/documentos/1867/ProyectoEducativo1867.pdf>

Muñoz, Tania, and Claudia Pool. 2011. *En el oleaje del olvido: Un rescate a la tradición cultural de los pescadores artesanales de la localidad de Las Ventanas*. Santiago: Fondo Nacional de la Cultura y las Artes.

Muñoz, Tania. 2012. "La pesca invisible: Análisis sobre las transformaciones de la actividad pesquera artesanal en Caleta Ventanas." Bachelor's thesis, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago.

OECD. 2018. *OECD Economic Surveys: Chile; Overview*. <https://www.oecd.org/economy/surveys/Chile-2018-OECD-economic-survey-overview.pdf>